

Señor

JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE AGUACHICA, CESAR. (reparto)

E. S. D.

Referencia: Acción de Tutela instaurada por **ALDO JESÚS IBARRA RONDÓN**, Contra **JUAN AURELIO GÓMEZ OSORIO**, representante suplente de las Comunidades Negras del Consejo Directivo de **CORPOCESAR**; Procedimiento de elección del representante de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales y la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR**.

MEDIDA CAUTELAR PROVISIONAL

Solicito medidas cautelares de suspensión provisional del acto administrativo que ordeno designar al señor **JUAN AURELIO GÓMEZ OSORIO** como representante suplente de las Comunidades Negras del Consejo Directivo de **CORPOCESAR**; Procedimiento de elección del representante de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, como quiera que la entidad accionada, no ha realizado el trámite alguno, para posesionar representante principal, en el acta de elección del mismo órgano, hasta tanto se resuelva este trámite de conformidad al artículo 7 del Decreto Ley 2591 de 1991.

ACCION DE TUTELA ARTICULO 86 DE LA CONSTITUCION POLITICA

Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.

COMPETENCIA

Es usted competente para conocer de la presente acción de Tutela de acuerdo con los parámetros establecidos por el Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el Decreto 1382 de 2000.

ALDO JESÚS IBARRA RONDÓN, persona mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.065.598.872 expedida en el municipio de Valledupar, Cesar, actuando como Representante legal del consejo comunitario los cardonales de Guacoeche, mediante el presente escrito instauró acción de tutela, en contra del señor **JUAN AURELIO GÓMEZ OSORIO**, persona mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía N° 91.539.781 expedida en el municipio de Bucaramanga, Santander, representante suplente de las

Comunidades Negras del Consejo Directivo de **CORPOCESAR**; Procedimiento de elección del representante de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales y la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR**, quienes vienen vulnerando de manera grave y continua los derechos fundamentales legalmente protegidos en la carta política, como son, **la vía de hecho, derecho al debido proceso, al Artículo 4º de la Ley 2591 de 1991, Interpretación de los derechos tutelados. los derechos protegidos por la acción de tutela se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.**

Teniendo en cuenta lo que indica el **CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: **LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ**
Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: **NULIDAD ELECTORAL**

Radicación: 11001-03-28-000-2020-00053-00

11001-03-28-000-2020-00057-00

Demandantes: **JUAN AURELIO GÓMEZ OSORIO y HERMES LEONIDASMOLINA OSORIO**

Demandado: **JOSÉ TOMÁS MÁRQUEZ FRAGOZO** representante principal de las Comunidades Negras del Consejo Directivo de CORPOCESAR.

Temas: Procedimiento de elección del representante de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.

se pronunció mediante auto en su parte final de lo siguiente, “con relación a la solicitud, Acorde con lo anterior, encuentra la Sala Electoral que por vicios en el procedimiento de elección que resultan trascendentes en la expedición del acto de elección demandado, se impone declarar la nulidad de la elección del señor **JOSÉ TOMÁS MÁRQUEZ FRAGOZO** en calidad de representante principal de las comunidades negras en el Consejo Directivo de **CORPOCESAR**, para el período 2020-2023. No obstante, se precisa respecto de la pretensión segunda incoada dentro del vocativo 00053, en cuya literalidad se solicitó: “Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al Director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, representada por **JOHN VALLE CUELLO**, actuar de conformidad con el **ARTÍCULO 2.2.8.5.1.10 del Decreto 1066 del 2015**, se pueda suplir (sic) la falta absoluta con la persona que fue elegida como suplente el día 13 de febrero del 2020, el señor **JUAN AURELIO GÓMEZ OSORIO**”, que al no ser una elección por voto popular demandada por causales objetivas, al juez de la nulidad electoral no le corresponde indicar sobre quién recae suplir la vacancia absoluta del cargo devenida de la declaratoria de nulidad electoral, pues aquella pretensión no corresponde a las consecuencias de la sentencia de nulidad, como lo pretendió la parte actora, pues ello corresponde a la entidad a cargo, luego de surtir el trámite administrativo electoral propio que debe acompañar a esta clase de designación y de desarrollar en debida forma el

proceso de elección respectivo, ya que contrario a lo manifestado por CORPOCESAR, quien en varias de sus postulaciones argumentó que no tenía injerencia en el acto demandado, es sobre ella quien recae la observancia de la regulación frente al proceso electoral, incluidos los actos preparatorios y de verificación, a tal punto que la nulidad del acto de elección, se originó por lo decidido por su Comité de Evaluación y Revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,"

De lo anterior se evidencia que la negativa de la entidad acciona **CORPOCESAR**, de no subsanar el procedimiento de nombrar a un principal, teniendo en cuenta, que el suplente, no está supedito a una elección electoral, pues ello, corresponde a la entidad arriba citada, designar el cargo, luego de surtir el trámite administrativo electoral propio que debe acompañar a esta clase de designación y de desarrollar en debida forma el proceso de elección respectivo, no evidenciando hasta la fecha actual dicho trámite, dejando ese espacio vacío para favorecer al suplente que no es elegido por una elección.

Configurándose una falta al no suplir la vacancia absoluta con un principal, y como quiera que está en curso una violación a las normas procesales y constitucionales, por vía de hecho por parte de **CORPOCESAR**, tiene a su cargo, la obligación legal y jurisprudencial de cumplir, con las normas ya establecidas, como lo consagra, los requisitos para que se configure la misma.

VÍA DE HECHO

Se puede afirmar que existe la vía de hecho cuando:

1. -Hay grave violación a las normas procesales
2. -Hay violación de principios constitucionales
3. -Existe desconocimiento de hechos determinantes
4. -La violación de los derechos fundamentales significa un perjuicio irremediable.

LA VÍA DE HECHO SE LIGA AL DEBIDO PROCESO

Hay que decir que existe el debido proceso adjetivo: la aplicación de normas procedimentales, que muchas veces se ambiciona constitucionalizar, (tal ocurre en el artículo 29 C.P.). Pero también existe el debido proceso sustantivo, de origen anglosajón, muy ligado a la **RAZONABILIDAD**. Como se ve, el debido proceso es muy complejo y la norma constitucional que lo contiene es una cláusula abierta.

- Para saber cuándo hay conformación de una vía de hecho, son muchas las sentencias de la jurisdicción constitucional, vale la pena reseñar unas pocas:
- “Es abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la

procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales.

- En efecto, si bien es cierto que en la Sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, esta Corporación declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2191 de 1991, también lo es que en tal fallo se permitió reaccionar ante determinadas providencias, ya sea para evitar perjuicios irremediables y defender los derechos fundamentales de las personas, o ya sea porque determinadas actuaciones judiciales pueden configurar vías de hecho que vulneran derechos fundamentales.
- **Así, en el citado fallo, la Corte precisó que no "riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales"**
- ¿Cuándo se configura entonces una actuación o vía de hecho imputable a un funcionario judicial? Esta Corporación ha delimitado el alcance de la vía de hecho judicial y ha señalado que ésta existe "cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos constitucionales de la persona.
- En efecto, en tales circunstancias, el funcionario judicial antepone de manera arbitraria su propia voluntad a aquella que deriva de manera razonable del ordenamiento jurídico, por lo cual sus actuaciones, manifiestamente contrarias a la Constitución y a la Ley, no son providencias judiciales sino en apariencia.
- Por ello, las vías de hecho judiciales son impugnables mediante tutela ya que el derecho al debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y es desarrollo del derecho de toda persona natural o jurídica para acceder a la administración de justicia; esta forma de acceso incluye la oportunidad de recibir tratamiento justo, lo cual implica respetar principios fundamentales de procedimiento como el de no ser condenado dos veces por el mismo hecho, el de procurar en lo posible retornar las cosas al estado anterior cuando ha ocurrido un delito y el de unidad de jurisdicción.
- Volver las cosas a su estado anterior a la Comisión del delito; De lo anterior se colige señor Juez de tutela, se evidencia que la entidad demandada **CORPOCESAR**, ha realizado una grave violación a las normas constitucionales ha permanecido hasta la fecha actual, teniendo en cuenta lo siguiente:

El artículo 55 transitorio de la Constitución Política de 1991, impuso al Congreso de la República la obligación de expedir, dentro de los dos años siguientes a su vigencia, una ley, por medio de la cual se reconociera a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva sobre los territorios que tradicionalmente habían sido ocupados por éstas. En cumplimiento de este mandato, el Legislador aprobó la **Ley 70 de 1993**, con la que reguló las generalidades del procedimiento para la adjudicación de los territorios colectivos.

En el artículo 5° ibídem, se estableció como presupuesto para el reconocimiento de este tipo de propiedad, la constitución de consejos comunitarios por parte de las comunidades negras, de acuerdo con los lineamientos erigidos por parte del Gobierno Nacional. Con ese propósito, el Ejecutivo expidió **el Decreto N°. 1745 de 1995**, en cuyo contenido se consagró como derrotero a tener en cuenta que una comunidad negra podía implementar la figura del Consejo Comunitario:
“Artículo 3°. Definición. Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.”

De lo anteriormente, se denota por el solo hecho de indicar el Honorable Concejo de Estado, en su sección Quita, el articulado de la creación y organización de los concejos comunitarios, al revocar la elección electoral del señor **JOSÉ TOMÁS MÁRQUEZ FRAGOZO**, al concejo comunitario de las comunidades afrodescendientes, del Consejo Directivo de CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR –en los sucesivos CORPOCESAR-, contenido en el del Acta 001 de 13 de febrero del 2020 del Consejo Directivo.

Esta entidad demanda, le fue anulado la elección del señor arriba citado, en razón de los vicios de procedimiento al no, respetar y acatar los mandatos de la carta política de Colombia, artículos **El artículo 55 transitorio de la Constitución Política de 1991**, habida cuenta, que hasta la fecha actual todavía el daño y/o el perjuicio irremediable, el cual deja la no posibilidad a los demás comunidades, de postular ante esa entidad demanda un representante principal, por no cumplir con los mandatos constitucionales.

Igualmente, existe una **grave violación a las normas procesales**, teniendo en cuenta el **Decreto 1745 de 1995** determinó la estructura institucional de los consejos comunitarios, al prescribir que estarían conformados por: (i) una Asamblea General, compuesta por todos los miembros de la comunidad afro, y (ii) por una Junta Directiva encargada de la dirección, coordinación, ejecución y administración de los consejos comunitarios, organizada de acuerdo con las particularidades propias de cada comunidad.

Igualmente, se dispuso que los miembros de la Junta del Consejo Comunitario fueran elegidos por los integrantes de la Asamblea para períodos de tres (3) años contados a partir del 1° enero de 1996, y cuya designación debía ser registrada ante los alcaldes de los municipios en los que se asientan las comunidades. **El Decreto 1745 de 1995** contempló a la vez que cada consejo comunitario dispondría de un representante legal.

Pero además del procedimiento para la adjudicación del territorio colectivo, **la Ley 70 de 1993** consagró en **su artículo 56** que las comunidades negras tenían derecho a que uno de sus representantes hiciera parte de los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con el procedimiento de elección que expidiera el Congreso, materializado en el

Decreto N°. 1523 de 2003, y cuyas fases y etapas se encuentran hoy compiladas en el capítulo 5° del Decreto N°. 1076 de 2015.

La última de las normas reglamentó los siguientes temas: (i) términos de la convocatoria para la elección; (ii) requisitos para la participación de los consejos comunitarios en el trámite de designación. Allí, permitió que estos intervinieran a través de su voz y voto, e incluso mediante la postulación de candidaturas; (iii) la creación de un comité para la revisión y verificación de las exigencias requeridas para participar en la designación; (iv) el período del cargo de representante; y (v) las faltas absolutas y temporales de aquel, así como la forma para suplirlas.

Evidenciándose una verdadera violación a las normas procesales que conllevan a una violación al debido proceso, al no convocar a nuevas elecciones la entidad demandada a las comunidades afrodescendientes de poder designar un nuevo miembro que los representara como principal al concejo comunitario de las comunidades afrodescendientes, del Consejo Directivo de **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR**, obligando la entidad demandada, a imponer un suplente, el cual su principal fue objeto de revocatoria de la elección.

en consecuencia hasta la fecha está ocupando el cargo un suplente el cual no es objeto de elección indicando la corte lo siguientes, al señor **JUAN AURELIO GÓMEZ OSORIO**, **que al no ser una elección por voto popular demandada por causales objetivas, al juez de la nulidad electoral no le corresponde indicar sobre quién recae suplir la vacancia absoluta del cargo devenida de la declaratoria de nulidad electoral, pues aquella pretensión no corresponde a las consecuencias de la sentencia de nulidad, como lo pretendió la parte actora, pues ello corresponde a la entidad a cargo, luego de surtir el trámite administrativo electoral propio que debe acompañar a esta clase de designación y de desarrollar en debida forma el proceso de elección respectivo, ya que contrario a lo manifestado por CORPOCESAR, quien en varias de sus postulaciones argumentó que no tenía injerencia en el acto demandado, es sobre ella quien recae la observancia de la regulación frente al proceso eleccionario, incluidos los actos preparatorios y de verificación, a tal punto que la nulidad del acto de elección, se originó por lo decidido por su Comité de Evaluación y Revisión.**

En ese orden existe, una grave violación al derecho al debido proceso al no convocar nuevamente a las comunidades (negras), la nueva convocatoria para que estos tuvieran una posible de tener una representación en el concejo directivo de CORPOCESAR, persistiendo la omisión, desde el pasado tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021), en razón de no permitir la convocatoria, dejando un vacío en la norma arriba citada, al no colocar en el cargo a un representante, elegido de manera electoral, por todas las comunidades que se presentaron las postulaciones con el lleno de los requisitos de ley.

Es de indicarle señor juez de tutela que la grave violación al artículo 29 de la carta política de Colombia, que incida lo siguiente; **El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal**

competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

- No existe duda algún señor juez, que la no aplicación de este principio fundamental, que es la vértebra de todo procedimiento legal, es nulo en razón de su contenido el cual debe ser acatados por todos los organismos ya sea publico y/o privado en este caso **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR**, y al mantener el vocero suplente en el concejo comunitario de las comunidades afrodescendientes, del Consejo Directivo de **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR**, dejaría sin voz alguna, a las demás comunidades en razón de que también tiene derecho de que sea llamada una nueva convocaría por parte de la entidad demandada.

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Procedencia excepcional

Desconocimiento del precedente judicial como causal específica de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.

Según lo consagrado en los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, al igual que la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta, tienen el deber de unificar la jurisprudencia al interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los pronunciamientos por ellas emitidos se conviertan en **precedente judicial de obligatorio cumplimiento.**

En reiteradas oportunidades, esta Corporación ha definido el precedente judicial como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo” Asimismo, la doctrina lo ha definido como el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen en el principio stare decisis o estar a lo decidido, el cual consiste en la aplicación de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares.

Bajo ese entendido y de acuerdo a la autoridad que emitió el pronunciamiento, se puede clasificar el precedente en dos categorías: **(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia. El precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, sino al derecho a la igualdad que rige en nuestra Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones,**

limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales.

Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte Constitucional ha reconocido el valor del precedente judicial de la ratio decidendi de sus decisiones, tanto en materia de constitucionalidad como en materia de tutela.

La sentencia C-104 de 1993 manifestó que las decisiones de la Corte Constitucional tienen naturaleza erga omnes y, además, no constituyen un criterio auxiliar de interpretación, sino que “la jurisprudencia constitucional tiene fuerza de cosa juzgada constitucional -art. 243 CP-, de suerte que obliga hacia el futuro para efectos de la expedición o su aplicación ulterior”

En sede de tutela, esta Corporación también se refirió a este asunto en la sentencia T-260 de 1995, oportunidad en la que sostuvo lo siguiente:

“Es verdad que, como esta Corporación lo ha sostenido repetidamente, uno de los principios de la administración de justicia es el de la autonomía funcional del juez, en el ámbito de sus propias competencias (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992), pero ella no se confunde con la arbitrariedad del fallador para aplicar los preceptos constitucionales. Si bien la jurisprudencia no es obligatoria (artículo 230 de la Constitución Política), las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, **indican a todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían, no se apartan simplemente de una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o el contencioso administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar**”

Más adelante, la Corte señaló que las autoridades públicas, tanto administrativas como judiciales, están obligadas a acatar los precedentes que fije la Corte Constitucional. De igual forma, preciso que, si bien es cierto que la tutela no tiene efectos más allá del caso objeto de controversia, la ratio decidendi constituye un precedente de obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas, “ya que además de ser el fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una norma”.

La jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido, incluso que, en sus decisiones, respecto a la interpretación de la Constitución en materia de derechos fundamentales, tienen prevalencia respecto de la interpretación que sobre la misma realicen los demás órganos judiciales, al habersele encargado la guarda de la supremacía de la Constitución.

Esto se refuerza a partir de las consideraciones expuestas en **la sentencia C-816 de 2011 en la que la Corte** declaró exequibles los incisos primero y séptimo del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, luego de indicar que las autoridades al

extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deben observar de preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia.

De igual forma, lo expresó en la sentencia C-539 de 2011, oportunidad en la que declaró exequible la expresión “que en materia ordinaria o contenciosa administrativa ” contenida en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, bajo el argumento de que los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, deben respetar la interpretación vinculante que realice la Corte Constitucional, la cual es prevalente en materia de interpretación de los derechos fundamentales y de la Constitución en general.

Lo dicho previamente no conlleva necesariamente a que en todos los casos los jueces deban acogerse al precedente judicial. Existen ciertos eventos en los que la autoridad puede desligarse del mismo, siempre que argumente de manera rigurosa y clara las razones por las cuales procede de ese modo.

Este Tribunal explicó que el apartamiento judicial del precedente es la potestad de los jueces de distanciarse de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de cierre, como expresión de la autonomía judicial constitucional. Para que sea válido es necesario el previo cumplimiento del estricto deber de consideración del precedente en la decisión, ya que la jurisprudencia de las corporaciones judiciales de cierre no puede ser sencillamente ignorada frente a situaciones similares a las falladas en ella. Sobre el particular expuso:

“Según lo establecido en su larga jurisprudencia por este tribunal, una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial sólo puede apartarse de la misma mediante un proceso expreso de contra argumentación que explique las razones del apartamiento, bien por: **(i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en la decisión precedente; (iii) discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea jurisprudencial. De este modo, la posibilidad de apartamiento del precedente emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga**”

Bajo ese entendido, el desconocimiento del precedente sin la debida justificación por parte del juez configura un defecto sustantivo como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. La Corte Constitucional ha establecido que una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional **(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de las razones previstas por la normatividad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realice una interpretación contraevidente**

o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial -horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso"

A fin de mantener firmeza en las posiciones adoptadas y en aras de proteger los derechos a la seguridad jurídica y a la igualdad, en razón a que no resulta justo que casos similares se resuelvan de manera diferente, los Tribunales y las Altas Cortes deben considerar estos principios al momento de tomar sus decisiones, toda vez que estas se convertirán en precedente judicial para los administradores de justicia y su no aplicación devendría en la causal referida. No obstante, tal regla tiene su excepción y se basa, precisamente, en aquellos momentos en que el funcionario desee apartarse del precedente establecido, sustentando y motivando las razones por las que omitió su aplicación.

Lo anterior, ha tenido respaldo en distintos pronunciamientos de este Tribunal acogidos en **la sentencia T-794 de 2011, en la cual se reiteró que el juez solo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes requisitos: (i) haga referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia); y (ii) ofrezca una carga argumentativa seria mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía.**

En sede de control abstracto, la Corte también resaltó la importancia de la carga argumentativa para justificar el apartamiento del precedente judicial, en los siguientes términos:

“Asimismo, la carga argumentativa del juez que se desliga del precedente implica una exigencia tal, que si él no realiza una debida justificación de las razones que lo alejaron de tal precedente constitucional se genera un defecto que puede viciar la decisión. El desconocimiento, sin debida justificación, del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales –sea este precedente horizontal o vertical, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe. Por lo cual y a pesar de la regla general de obligatoriedad del precedente judicial, siempre que el juez exprese contundentemente las razones válidas que lo llevaron a apartarse del precedente constitucional, su decisión será legítima y acorde a las disposiciones legales y constitucionales”.

Ahora bien, el desconocimiento del precedente constitucional tiene su origen en la aplicación directa de la regla superior contenida en el artículo 13 de la Carta Política (derecho a la igualdad). Al ser este Tribunal el encargado de salvaguardar la integridad y la supremacía de la Constitución, de fijar los efectos de los derechos fundamentales y determinar el sentido en el que debe

interpretarse la Constitución, sus pronunciamientos constituyen un precedente excepcional de obligatorio cumplimiento para todos.

Sobre el desconocimiento del precedente constitucional como defecto constitutivo de una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales esta Corporación ha señalado que se predica únicamente de los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional, y se **presenta cuando el funcionario, al resolver un caso concreto, se aparta de la interpretación dada por este Tribunal. Al respecto:**

“La interpretación de la Constitución, que además permite materializar la voluntad del constituyente, tiene como propósito principal, orientar el ordenamiento jurídico hacia los principios y valores constitucionales superiores.

No reconocer entonces el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, sea por desconocimiento, descuido, u omisión, genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Que perturba, además la eficiencia y la eficacia institucional, en la medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando, en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra organización judicial”

Es preciso resaltar que los fallos emitidos por la Corte irradian dos tipos de efectos: en el caso de los fallos de control abstracto de constitucionalidad estos hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, de ahí que se ha reconocido su carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho; por el contrario, los efectos de los fallos de tutela en principio son inter partes.

No obstante, existe un punto de encuentro y es que ambos fallos se deben observar, no solo por reconocer que la Constitución es norma superior, sino para garantizar el derecho a la igualdad de los administrados.

Los efectos inter partes de las acciones de tutela en ocasiones pueden hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión que realiza el Tribunal Constitucional. En este sentido, la vinculación de los jueces de tutela a los precedentes constitucionales, resulta relevante para la unidad y la armonía del ordenamiento jurídico como un conjunto estrechamente relacionado a la Constitución.

Por tal razón, de no acogerse un precedente constitucional, la consecuencia devendría en restarle fuerza normativa a la Carta, ya que cada juez podría interpretar la norma constitucional como quisiera, desarticulando el sistema jurídico de las interpretaciones hechas a Constitución.

Se entiende, entonces, que, aunque existe un valor vinculante del precedente y la obligación de los jueces de acogerse a este en sus decisiones, esto no implica

que dicha obligación coarte la libertad de decisión del juez o la autonomía judicial consagrada en la Constitución, porque existe la posibilidad para los operadores judiciales de apartarse del precedente si cumple con los requisitos establecidos para ello, siempre que cumplan debidamente la carga argumentativa.

EL DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS DECISIONES JUDICIALES. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

Esta Corporación ha sido enfática en señalar que el precedente judicial no está limitado a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que se extiende a las Altas Cortes.

En la sentencia C-335 de 2008, la Corte se refirió a las decisiones de todos los órganos de cierre jurisdiccional y reiteró el carácter vinculante de su jurisprudencia, en los siguientes términos:

“Reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redundante en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos.

De igual manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera.

Así mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares”.

De manera similar se pronunció la Corte en la sentencia C-816 de 2011, al sostener que la fuerza vinculante de las Altas Cortes surge de su definición constitucional como órganos de cierre, “condición que les impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones”.

La importancia de este precedente también fue explicada recientemente en la sentencia SU-053 de 2015, al señalar que cuando emana de los Altos Tribunales de Justicia adquiere un carácter ordenador y unificador “que busca realizar los principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza, certeza del derecho y debido proceso”. Sobre el particular explicó:

“En la práctica jurídica actual, las instancias de unificación de jurisprudencia son ineludibles, debido a que el derecho es dado a los operadores jurídicos a través de normas y reglas jurídicas que no tiene contenidos semánticos únicos.

Por tanto, el derecho es altamente susceptible de traer consigo ambigüedades o vacíos que pueden generar diversas interpretaciones o significados que incluso, en ocasiones deriva de la propia ambigüedad del lenguaje.

Eso genera la necesidad de que, en primer lugar, sea el juez el que fije el alcance de éste en cada caso concreto y, en segundo lugar, de que haya órganos que permitan disciplinar esa práctica jurídica en pro de la igualdad”.

El principio de igualdad adquiere especial relevancia en este punto, si se tiene en cuenta que un trato diferenciado por parte de los jueces a los ciudadanos cuyos casos se fundamentan en iguales supuestos fácticos transgrediría ese principio constitucional.

Al respecto, es preciso reiterar que el principio de igualdad es a su vez expresión del principio de legalidad, en tanto “el ejercicio de las funciones administrativa y judicial transcurre en el marco del estado constitucional de derecho y entraña la concreción del principio de igualdad de trato y protección debidos a los ciudadanos, en cumplimiento del fin estatal esencial de garantizar la efectividad de los derechos, y en consideración a la seguridad jurídica de los asociados, la buena fe y la coherencia del orden jurídico. Lo que conduce al deber de reconocimiento y adjudicación igualitaria de los derechos, a sujetos iguales, como regla general de las actuaciones judiciales y administrativas”

Esta Corporación ha sostenido que el principio de igualdad es uno de los elementos más relevantes del Estado constitucional de derecho y lo ha entendido como aquel que ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho.

Lo anterior, encuentra sustento en el **artículo 13 de la Constitución Política**, del cual se desprenden las diversas dimensiones de esta garantía constitucional, a saber: **(i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales.**

En el mismo sentido, ha sostenido que la igualdad cumple un triple papel en nuestro ordenamiento constitucional por tratarse simultáneamente de un valor, de un principio y de un derecho fundamental; carácter múltiple que se deriva de su consagración en preceptos de diferente densidad normativa que cumplen distintas funciones en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el preámbulo constitucional establece entre los valores que pretende asegurar el nuevo orden constitucional la igualdad, mientras que el artículo 13 de la Carta ha sido considerado como la fuente del principio fundamental de igualdad y del derecho fundamental de igualdad; al igual que existen otros mandatos dispersos en la Constitución, que actúan como normas especiales que concretan la igualdad en ciertos ámbitos definidos por el Constituyente.

Que cubija también a la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Sólo así se puede asegurar la vigencia de un orden justo (C.P. art. 2º).

De la anterior premisa jurisprudencial, se tiene que la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR**, está violando el derecho de las comunidades (negras), de no convocar nuevamente a elecciones, vulnerando el deber legal, constitucional y jurisprudencial, es usted señor Juez de la República, garante de realizar un análisis de la jurisprudencia, que fue objeto de la solicitud, de revocatoria de la elección electoral, al no respetar el precedente del consejo de estado en su sección quinta, el cual le indico que estos debería realizar el trámite para convocar a nuevas elecciones como lo determina el decreto Ley "i). Conforme con lo señalado en el artículo 2.2.8.5.1.5 del Decreto 1076 de 2015, "Las comunidades negras, en la reunión pertinente, adoptarán la forma de elección de su representante y suplente ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales". Es decir, que independiente del acaecimiento o no de la situación que se alega como irregular, dicho suceso solo le puede ser atribuido directamente a los integrantes de los consejos comunitarios, quienes son los encargados del proceso de elección de forma directa.

No en vano, según el acta del 13 de febrero de 2020, siguiendo el proceso de elección, conforme con lo señalado en el artículo 2.2.8.5.1.6 del Decreto 1076 de 2015, se instaló la reunión de elección por el secretario general, se rindió el informe sobre la revisión de la documentación aportada por los consejos comunitarios participantes y se procedió a efectuar la designación del presidente y secretario de la reunión por las comunidades negras, encargadas de la reunión.

Lo cual es congruente con el respeto por la autonomía de las minorías étnicas y sus derechos de autogobierno y autodeterminación.

No se trata de una situación que haya tenido incidencia sustancial en el resultado, por cuanto el elegido ganó con 10 votos a favor y el suplente obtuvo 7, es decir, que al sumarle uno al suplente, llegaría a 8 votos, sin que se logre enervar el triunfo del demandado."

Indicando la Honorable Cortes Constitucional y órganos de cierre, Las directrices ya establecidas:

(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia. El precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, sino al derecho a la igualdad que rige en nuestra Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales.

Por tal razón, de no acogerse un precedente constitucional, la consecuencia devendría en restarle fuerza normativa a la Carta, ya que usted, como juez de la República, tiene el deber legal interpretar la norma constitucional, la jurisprudencia y los tratados internacionales que versan sobre la materia que hoy nos ocupa, y que son de obligatorio cumplimiento de aplicarlas, al sistema jurídico de las interpretaciones hechas por la Constitución.

Es de indicar y recordarle señor Juez, que fije el alcance de éste, en cada caso concreto y más aún en el caso que nos ocupa el día de hoy, en segundo lugar, de que haya órganos que permitan disciplinar esa práctica jurídica en pro de la igualdad".

De las Anteriores premisas jurisprudenciales y legales, se tiene que esta acción pública, está llamada a prosperar teniendo en cuenta que existe una vulneración al derecho fundamental anteriormente citados, por ende, señor juez, ordene a las entidades demandadas que un término no superior a cuarenta y ocho (48) hora, siguientes a la notificación de este fallo, convocar a nuevas elecciones a las comunidades (negras), al concejo comunitario de las comunidades afrodescendientes, del Consejo Directivo de **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR**, y si, cumplir con los parámetros establecido en la ley jurisprudencias, tratados internacionales y la constitución de Colombia.

PRETENSIONES

- Solicito que se ordene a Corporación autónoma regional del Cesar, Corpocesar, que realice el trámite correspondiente y convoque nuevamente a elecciones para elegir el representante principal y uno suplente de las comunidades negras ante el consejo directivo de la Corporación autónoma regional del Cesar, Corpocesar.
- Que se le ordene a la Corporación autónoma regional del Cesar, Corpocesar, notificar a todas comunidades negras con el fin de que se hagan partícipes de la elección del nuevo representante principal y suplente de las comunidades negras ante el consejo directivo de la Corporación autónoma regional del Cesar, Corpocesar.
- Que se Suspenda el voto del Consejero suplente, el señor, JUAN AURELIO GÓMEZ OSORIO hasta tanto se resuelva de fondo el vicio de procedimiento por parte de la Corporación autónoma regional del Cesar, Corpocesar.

PRUEBAS

- Acta de elección 001 del 13 febrero de 2020.
- Providencia judicial emitida por el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección quinta en donde se declara la nulidad del acta de elección 001 del 13 de febrero de 2020 por medio de la cual

se elegía al señor del señor JOSÉ TOMÁS MÁRQUEZ FRAGOZO, como representante principal de las comunidades negras ante el consejo directivo de CORPOCESAR.

- Resolución 0285 del 10 de junio de 2022 por la cual se da cumplimiento a una decisión judicial que declaró la nulidad del acta del 17 de septiembre de 2021 a través de la cual se eligió al señor José Tomas Márquez Fragozo, como representante principal y a María Beatriz Torres Díaz como suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma del César, CORPOCESAR.
- Acta de posesión del señor Juan Aurelio Gómez Osorio, como representante principal de las comunidades negras ante el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpocesar
- Constancia de elección y registro de la junta del consejo comunitario de comunidades negras "Los Cardonales" de Guacoche ante la alcaldía municipal.

NOTIFICACIONES

- Al suscrito, en el Correo Electrónico: valledupar1989@icloud.com
aldojesusibarra27@gmail.com
- Al accionado, en el correo electronico: osorioyabogados@hotmail.com
- A la accionada: las recibirá en la K.M 2 vía a La Paz Lote 1 U.I.C Casa - E Campo; Frente a la Feria Ganadera – Valledupar.
Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@corpocesar.gov.co.

Del Señor (a) Juez, Atentamente,



ALDO JESÚS IBARRA RONDÓN

CC. N° 1.065.598.872 DE Valledupar, Cesar.